**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**PALCIO DE JUSTICIA “Fanny González Franco”**

**CENTRO DE SERVICIOS - AREA DE TRABAJO SOCIAL**

**FECHA: 13 de mayo de 2019**

**PROCESO: ACCION DE TUTELA**

**JUZGADO: 6º DE FAMILIA**

**RADICADO: 00173 – 2019**

**ACCINONANTES: JAIME HERMIDES CASTELLANOS MARTINEZ ROSA IRENE DUARTE TRIVIÑO**

**DIRECCION: Carrera 11D Nº 47B – 78 Barrio El Caribe**

**8909964 - 3117703456**

**APODERADO: DR. OSCAR TABARES GIL**

**ACCIONADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**INFORMANTE: ROSA IRENE DUARTE TRIVIÑO**

**OBJETIVO:**

Verificar la situación personal, social, económica, familiar, habitacional, salud y demás, de quienes conforman su núcleo familiar, con quién o quiénes viven, quién o quiénes proveen el sustento, de dónde perciben los ingresos para su sostenimiento, cuáles son sus gastos mensuales, personas a cargo, si son propietarios de bienes muebles o inmuebles, vehículos, establecimientos de comercio, titularidad de cuentas bancarias o servicios financieros.

**TECNICAS UTILIZADAS**:

Visita domiciliaria a la residencia de la señora ROSA IRENE DUARTE TRIVIÑO.

Revisión Documental

Aplicación de Ficha Técnica

Entrevista semi - estructurada

**METODOLOGÍA:**

Lectura del expediente, valoración del contenido, pre-diagnóstico, observación directa, entrevista con aplicación de protocolo, preguntas abiertas y cerradas enfocadas a establecer las condiciones familiares y de toda índole que rodean a los accionantes.

Dando cumplimiento a lo solicitado por su despacho mediante auto de 7 de mayo de 2019 que admitió la Acción de Tutela y que me correspondiera por reparto realizar la visita social ordenada, a fin de verificar la situación personal, social, económica, familiar, habitacional, salud y demás de los accionantes.

Entreviste de manera informal a la señora ROSA IRENE y ella respondió a las preguntas de manera clara y espontánea.

**COMPOSICION FAMILIAR:**

La señora ROSA IRENE DUARTE TRIVIÑO es casada con el señor JAIME HERMIDES CASTELLANOS MARTINEZ, tuvieron dos hijos, JAIRO ALONSO CASTELLANOS DUARTE (fallecido) y SANDRA MILENA CASTELLANOS DUARTE, soltera, tiene dos hijos, vive independiente y trabaja en la empresa TECNIANSA.

Los esposos CASTELLANOS – DUARTE se encuentran separados de hecho desde hace 6 años. Actualmente la señora ROSA IRENE vive sola y trabaja atendiendo su propio negocio TIENDA LA BARCA DE ORO ubicado en la parte baja de su residencia y con amplia trayectoria en el barrio.

**ASPECTO ECONÓMICO FAMILIAR**

**La vivienda es propiedad de los esposos CASTELLANOS - DUARTE**, está ubicada en zona urbana de la ciudad Barrio El Caribe carrera 11 D Nº47B - 78, consta de tres niveles con acceso por escalas; en el primer nivel está ubicado el negocio **TIENDA LA BARCA DE ORO** atendida por su propietaria, totalmente surtida con productos de papelería , aseo personal, aseo para el hogar, productos de belleza, alimenticios, gaseosas, cerveza, lácteos, embutidos, regalos para toda ocasión, además de accesorios y todo lo para la industria de la confección (hilos, botones, agujas y demás). En dicho nivel hay un baño, cocina y patio de ropas; el segundo piso consta de tres habitaciones de regular tamaño y un espacio con acceso por escalas y baranda a la terraza. Tienen servicios públicos de agua, luz, gas domiciliario parabólica y teléfono; su estado de conservación es bueno y al momento de la visita se encontraba en aceptables condiciones higiénicas dada la hora de la visita 9:15 a.m.

Tiene muebles y enseres necesarios para el hogar con adecuada distribución de los mismos; no tiene artículos suntuarios.

El señor **JAIME HERMIDES CASTELLANOS MARTINEZ** es pensionado con un salario mínimo y recibe además el 25% de la pensión de su hijo ($280.000.oo) supliendo así, sus necesidades básicas. **La señora ROSA IRENE tiene su propio negocio y también recibe el 25% de la pensión de su hijo**; ninguno de **los dos tiene personas a cargo**. La señora ROSA IRENE, afirma que está separada de su esposo desde hace 6 años y desconoce su lugar de residencia, afirmando que vive con otra señora, pero ella, no sabe quién es.

**ROSA IRENE maneja una cuenta bancaria en Bancolombia, aduciendo que allí le consignan lo que le corresponde de la pensión de su hijo**.

Los accionantes CASTELLANOS - DUARTE pertenecen a un estrato medio bajo con las características propias del mismo, manejan buenas relaciones interpersonales y comunitarias, tienen lazos afectivos sólidos, hay autocuidado y acompañamiento permanente de la hija.

La señora SANDRA MILENA CASTELLANOS DUARTE convive en unión libre, tiene 2 hijos LAURA CAMILA RODRIGUEZ de 20 años y SANTIAGO FLOREZ de 8 meses; trabaja en la empresa TECNIANSA y suple sus propios gastos.

La señora ROSA IRENE está vinculada a la **EPS Salud Total** como beneficiaria del señor **JAIME HERMIDES CASTELLANOS MARTINEZ**

**CONCEPTO SOCIAL:**

Realizada la correspondiente visita a la residencia ubicada en el Barrio El Caribe carrera 11 D Nº47B – 78 y con la información recopilada a través de las técnicas utilizadas; se concluye finalmente que los accionantes CASTELLANOS – DUARTE, viven en condiciones normales en un estrato medio – bajo, manejando cada uno su estatus económico. Por lo anterior no se vislumbra que exista un perjuicio irremediable por afectación al mínimo vital ni factores de riesgo que vulneren o trasgredan sus derechos fundamentales. Considero que los accionantes deben recurrir a otras instancias para reclamar y hacer valer sus derechos.

Ahora bien, debe tenerse presente que la acción de tutela fue concebida desde sus orígenes constitucionales dentro del Ordenamiento Jurídico Colombiano como un mecanismo expedito de protección de derechos fundamentales pero también se le asignó un carácter subsidiario o residual ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.

Es por esto que el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6 determinó que la acción de tutela es improcedente *“cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*.

Respecto a lo anterior, el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva en sentencia T-023 de 2011 reiteró el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional al considerar:

*“De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela procederá siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.*

*“(…) Así ha destacado en múltiples oportunidades[[1]](#footnote-1) que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta[[2]](#footnote-2). En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.”*

Teniendo presente lo citado, debe recalcarse que la protección de los derechos fundamentales no es exclusiva de la acción de tutela sino que es transversal a todo el ordenamiento y su garantía se debe proporcionar mediante todos los mecanismos de defensa judicial ordinarios existentes, pues el amparo constitucional es extraordinario. Sin embargo, el hecho de que exista un mecanismo de defensa alternativo no es suficiente para que se derive la improcedencia de la acción de tutela, pues *“En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio[[3]](#footnote-3).*”

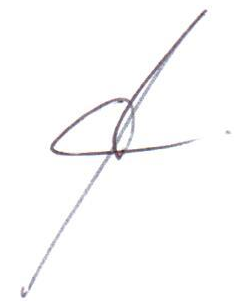
Asimismo, sobre el empleo de la acción de tutela como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable la H. Corte Constitucional en sentencia T-001 de abril 03 de 1992, señalo:

*“Tiene, pues, esta institución, como dos de sus caracteres distintivos esenciales (los de mayor relevancia para efectos de considerar el tema que ahora se dilucida) los de la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3, Constitución Política); el segundo, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.”*

**Carácter principal o subsidiario de la tutela y la necesaria acreditación o evidencia de un inminente perjuicio irremediable sobre el derecho fundamental vulnerado.**

*“También son ingredientes propios de la procedibilidad objetiva, que la tutela sea o bien la acción principal o única existente para proteger el derecho vulnerado para el caso en concreto, o bien deba operar como herramienta judicial constitucional de carácter subsidiario. Lo anterior, explicaba, entre otras decisiones, la sentencia SU-1070 de 2003, en razón a que: “1º) Los medios y recursos judiciales ordinarios constituyen los mecanismos preferentes a los cuales deben acudir las personas para invocar la protección de sus derechos; 2º) En los procesos ordinarios se debe garantizar la supremacía de los derechos constitucionales y la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. arts. 4º y 5º); 3º) La tutela adquiere el carácter de mecanismo subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial; su objeto no es desplazar los otros mecanismos de protección judicial, ´sino fungir como último recurso (...) para lograr la protección de los derechos fundamentales’; y 4º) La protección de derechos constitucionales fundamentales es un asunto reservado a la tutela, en la medida que el ordenamiento jurídico no ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial”.*

*“Ahora bien, la existencia de otros medios y recursos judiciales ordinarios para la protección de los derechos fundamentales, no es óbice para ejercer la acción de tutela. Como se ha establecido en decantada jurisprudencia, por ejemplo en la sentencia T-997 de 2007, en determinados casos “en que existan medios de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable (…).”* (Sentencia T-275 de 2012) (Subraya el Juzgado).



**PATRICIA GONZALEZ CARRILLO**

**Trabajadora Social**

1. ***Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C- 1225 de 2004, MP Manuel José Cepeda Espinosa; SU- 1070 de 2003, MP Jaime Córdoba Triviño; SU – 544 de 2001 MP Eduardo Montealegre Lynett; T – 1670 de 2000 MP Carlos Gaviria Díaz, y desde luego la T – 225  de 1993 en la cual se sentaron las primeras directrices sobre la materia, que en esencia han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior.*** [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Cfr. T- 803 de 2002 MP Álvaro Tafur Galvis.*** [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Sentencia T-972/05.*** [↑](#footnote-ref-3)